

El gobierno Lula: notas sobre un sinuoso derrotero

Por Elsa Ponce¹

Introducción: acerca de anhelos infundados

Había una vez un obrero metalúrgico que se hizo presidente y el pueblo fue feliz... Acaso este sea el epitafio para una etapa de la historia brasileña, que resume el intento por suturar dos principios inconciliables, democracia liberal y justicia, en un país en el que la fe en la burguesía ha sido una marca de origen desde los inicios de la república. Pero al mismo tiempo acaso sea el preludio de una pregunta aún sin responder por el Partido de los Trabajadores, esto es, por qué las banderas a favor de los oprimidos han sido tan prontamente arriadas durante el gobierno de Lula. Ciertamente este interrogante hace trizas las valuaciones generalizadas sobre su gobierno y la figura del propio Lula. Nos interesa en todo caso desenvolver conjeturalmente el principio base del actual estado de deslegitimación del PT como actor decisivo en el escenario político.

En un trabajo publicado en 2005 James Petras y Walther Veltmeyer (2005) retrataron una serie de definiciones de corte neocolonial, durante el primer gobierno de Lula, que anticipaban ya el rumbo de su agenda de gobierno. Entre ellas, los autores señalan dos operaciones costosísimas en términos de la idea de independencia de la política norteamericana, esto es, el envío de tropas a Haití en 2004 para proteger la MINUTASH², ocupación concluida recién a mediados de 2017 y la movilización de 15.000 soldados hacia las fronteras colombianas en 2007, en consonancia con la militarización social del gobierno de Uribe, so pretexto de la vigilancia y represión al tráfico de drogas y armas. Asimismo, Petras y Veltmeyer subrayan que en ese periodo no se estrecharon los lazos políticos con otros países cuyos gobiernos poseían una proximidad ideológica con el PT. En el orden interno la salida de la base parlamentaria de la diputada Heloisa Helena puso de relieve que el PT estaba dispuesto a desenvolver alianzas por lo menos peligrosas, para el repertorio de decisiones sobre asuntos prioritarios, en materia de economía y derechos sociales. Así pues, la alianza con el Movimiento Democrático de Brasil (MDB) que ungiera a José Sarney como presidente del senado durante 2009 y 2010, acarrearía consecuencias decisivas en términos de las definiciones de la gestión del Estado.

En otro orden, un momento significativo, fue la salida del gabinete de gobierno del teólogo Frei Betto, responsable, durante un año, del programa Fome Zero, gestión que abandonara cuestionando los rumbos de la política económica y la burocracia con que debía lidiar para ejecutar dicho programa. Como apuntan Petras y Veltmeyer, en este orden, durante el gobierno de Lula se trazó una apertura a capitales extranjeros, particularmente los chinos, con los que se entabló un ciclo de comercialización de materia prima mineral y agrícola e importación de bienes manufacturados y aunque la tasa de exportación reportó considerables ganancias al Estado, por ejemplo durante 2004, su

¹ Doctora. Profesora Asociada. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Catamarca. E-Mail de contacto: elsaponce1@gmail.com

² Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, impuesta mediante resolución de la ONU, después de las insurrecciones populares, iniciadas en Gonaïves contra la prolongada transición política impuesta en 1994 desde la ocupación americana denominada *Defender la democracia*. Las tropas brasileñas se retiraron de Haití recién a mediados de 2017.



política salarial aumentó apenas unos 20 reales, el equivalente a 86 dólares mensuales. Agregan que para medios como el Global invest, Brasil pasó de ser la octava economía mundial a fines de los noventa a ser la decimoquinta, en 2004, precisamente entre los gobiernos de Cardoso y Lula, ciclo en el que la tasa de desempleo corrigió todas las previsiones planteadas, tratándose de un gobierno de centroizquierda.

Como apunta Druk (2006) este ciclo de ocho años estuvo marcado por un sindicalismo bien comportado, que dejó de cuestionar la dinámica de la relación entre Estado y capital financiero, juzgando que la nueva etapa de la economía brasileña resultaba de un giro mundial que impactaba en Brasil evidenciando que la derecha neoliberal ambicionaba su retorno al poder político, habiendo conservado su poder económico. Ubicaba la crisis de legitimidad por la que atravesó el gobierno en 2005, al acusarse de corrupción a su principal figura, José Dirceu³, como parte de la estrategia de los neoliberales nativos en pos de re-lanzar su ascenso al control del Estado.⁴ El sindicalismo se condujo pragmáticamente, silenciando las reivindicaciones clasistas, con que particularmente la CUT había subsistido en la escena política desde 1983, prevaleciendo en la coyuntura que va de 2003 a 2011 una política del “mejorismo”,⁵ centrada en la solución de demandas inmediatas y atada a una creciente burocratización del otrora sindicalismo combativo.

El orden económico en que inicia su gobierno Lula se caracteriza por una alta fragilidad macroeconómica, pues en 2002 la deuda neta del sector público era elevada; su tasa de inflación crítica; sin reservas internacionales, ya que los fondos del banco central comprendían una abultada parte a deuda para con el Fondo Monetario Internacional.

Apenas asumió Lula la presidencia elaboró un repertorio de medidas tendientes a paliar el déficit estatal y disminuir, en sus propios términos, drásticamente, las consecuencias sociales de ese descalabro económico con la ley del primer empleo, que instituía la figura de contratos temporarios; la de contratación de empresas, prestadoras de servicios, que podrían ser conformadas por una sola persona jurídica, lo que habilitaba la posibilidad de encubrir relaciones laborales fraudulentas; la ley denominada del Super Simple (de lo muy simple), que posibilitaba la flexibilización de condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas. El gobierno ponderó que estas transformaciones requerían de hecho una reforma legislativa del trabajo y la sindicalización.

Iniciando un ciclo de desaliento a la movilización y de una posterior burocratización gremial, particularmente a partir de la creación del Foro Nacional del Trabajo, en 2003, que promovió el proyecto de reforma sindical enviado al parlamento. Ya de la conformación esta entidad son excluidas las confederaciones sindicales, en sintonía con la hegemonía de las centrales sindicales, particularmente la CUT y Força Sindical. Sin embargo, las deliberaciones que precedieron a la votación del documento final que se elevaría al Congreso, fueron interrumpidas cuando el activismo de base abrió cuestionamiento a la deficitaria democracia sindical.⁶

El proyecto de reforma sindical se articuló en torno a tres ejes para la transformación de la relación entre Estado y trabajo: el modelo de organización sindical, la negociación colectiva sobre derechos de los trabajadores y la solución de conflictos laborales. El 3 Ministro de la presidencia al inicio del primer mandato de Lula, acusado y condenado a prisión por haber sobornado, junto a otros altos funcionarios, cuatro partidos políticos, por entonces opositores al gobierno, a cambio de apoyo en el esquema de votaciones parlamentarias a favor de propuestas del oficialismo.

4 Véase Documento final del Congreso de la CUT 2006.

5 Expresión empleada por Sampaio jr. (2005) citado por Druk (2006).

6 Véase Galvão, Andréia (2005).

núcleo duro de la reforma incluyó la presencia sindical, en los términos señalados, a través del consejo nacional de relaciones del trabajo (CNRT), integrada por el gobierno, los trabajadores, indicados por las centrales sindicales con personería jurídica y la patronal, designados por el MTE⁷. El proyecto atribuyó un excesivo poder a las centrales sindicales que quedaban así asimiladas al Estado, con la facultad de crear o cercenar a los sindicatos de base que no cumplieren con la requisitoria de modernización de sus organizaciones y con la prerrogativa de controlar los fondos de pensión de las empresas estatales.

Otra modificación planteada en la reforma sindical fue la eliminación del impuesto sindical, pero sustituido por un aporte igualmente compulsivo, la *contribución de negociación colectiva*, que sería redistribuida a las centrales sindicales, financiación que habilitaba una subordinación hasta entonces preservada, de los gremios al Estado. En términos de los derechos laborales la reforma introdujo una modificación involutiva de las conquistas alcanzadas, esto es, imponía una regulación del derecho de huelga, facultaba a las empresas para contratar trabajadores en reemplazo de los huelguistas, bajo el supuesto de garantizar los servicios interrumpidos, mediante prerrogativas sobre la comunicación con 72 hs. de anterioridad de cualquier medida de fuerza y una cláusula que habilitaba que las condiciones de contrato colectivo en los niveles superiores podrán servir de base para la negociación de los contratos a niveles inferiores. De modo que en su matriz la iniciativa reformista otorgaba significativas concesiones a los intereses patronales y abría paso al predominio de acuerdos entre patrones y trabajadores por encima de las leyes laborales ya conquistadas.

Pese a la progresiva implementación de las reformas propuestas, Lula afrontó un incisivo reclamo de marcha atrás en la política económica con la gran huelga de los obreros metalúrgicos en 2006, la de empleados públicos en abril de 2007 y la masiva protesta de distintos sectores del movimiento sindical y las organizaciones sociales, entre ellas el propio MST, en el mes siguiente.⁸ En ese marco, la cooptación siguió a la desmovilización, produciéndose en la medida que ingresaron al staff gubernamental activistas sindicales, ya como funcionarios administrativos ya como articuladores políticos. Tarea que los convirtió en una clase sui generis, como señala Oliveira (2003), pues no representaban una nueva elite de propietarios enriquecidos a costa del Estado ni se desempeñaron como gestores del capitalismo empresarial propiamente, sino que representaban los fondos estatales e institucionales, advinieron administradores de fondos previsionales. Entre las figuras más salientes de ambos periodos se hallan Delúbio Soares (ex-tesorero de la CUT), Luiz Marinho (ex-presidente del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC), Luiz Gushiken (ex-presidente del Sindicato de los Bancarios-Sao Paulo), Ricardo Berzoini (ex-presidente del Sindicato de los Bancarios-Sao Paulo), Paulo Okamoto (ex-dirigente del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC), Humberto Costa (ex-dirigente del Sindicato de los Médicos-Pernambuco), Jaques Wagner (ex-dirigente del Sindicato de los Químicos-Bahía), Luiz Dulci (ex-dirigente del Sindicato de los Profesores-Matto Grosso), Marcelo Sereno (ex-dirigente del Sindicato de la Vale de Rio Doce) y Jacó Bittar (ex-presidente del Sindicato de los Petroleros). El PT afirmó reiteradamente que estas designaciones mostraban el respeto del gobierno a la base militante en que se había apoyado la candidatura de Lula, mientras que en el segundo mandato la alianza con los sectores de centroderecha, ya referida, se evidenció en la disminución de designaciones de los partidarios del PT en el poder ejecutivo.

Otro dato significativo de esta notable desmovilización de la CUT se advierte en el

⁷ Ministerio de trabajo y empleo.

⁸ Fuente <https://www.sinpro-rio.org.br/site2/Noticias/noticia/21124>. Fecha de consulta: 26/11/18.



incremento de la sindicalización ligada a la entidad Força Sindical particularmente entre 2003 y 2006 y a partir de la desafiliación del Sindicato Nacional de los Docentes de las Instituciones de Enseñanza Superior en 2005. Diversos analistas juzgan que en parte es la respuesta al descontento de los afiliados a la CUT por su alineamiento con el gobierno, pese al incremento salarial asignado por sobre la inflación media del país en dicho ciclo (Dias, 2005, Galvao, 2010). La disidencia de esos 72 000 profesores desafiliados de la CUT se centró en la reforma sindical aprobada en 2005.

Hacia la finalización del primer mandato los sectores vinculados a organizaciones sindicales y sociales denunciaban que la tregua para con el gobierno de Lula había acabado. Así pues, en mayo de 2007 a poco de iniciar su segundo mandato, el entonces presidente afrontó durante las conmemoraciones del día del trabajador la enérgica y masiva protesta contra los ya visibles efectos de la reforma sindical, que habían limitado el derecho de huelga, la reducción de puestos de trabajo en el sector industrial y la ampliación de la franja de trabajadores precarizados, efecto igualmente visible de la reforma laboral ya señalada.

En cuanto a la disminución del potencial interpelador del Movimiento Sin Tierra al estado y el gobierno, siguiendo un registro panorámico de la prensa de las propias organizaciones, señalamos que hacia mediados de 2004 sus recurrentes ocupaciones de latifundios⁹, habían disminuido considerablemente mientras se difundían informaciones acerca del incremento de partidas presupuestarias para financiar sus actividades y el aumento de la creación de entidades cooperativas. Mientras tanto el MST admitía que si bien el gobierno destinó, entre 2003 y 2006, R 12. 000.000 de reales desde el Ministerio de desenvolvimiento agrario, dichas remesas llegaron a través de asistencia técnica y con demora a los asentamientos, debiendo incluso el propio MST suplir acciones operativas para la entrega de insumos alimentarios a los asentados.

Pese a su promesa de que hacia 2006 unas 430.000 familias accederían a la posesión de tierras para vivir y trabajar, en 2004 Lula llamó a la moderación de las formas de lucha por reforma agraria al activismo del Movimiento (El País, 24/04/2004). En esa línea de análisis, el Instituto de Estudios económicos y sociales señala que el asentamiento de 120 mil familias, en 2006 y la promesa de asentar otras 1000.000 en 2007, no pasa de un programa de compensación social ya que se produjeron medidas paliativas como el seguro agrícola para pequeños agricultores, el programa de extensión de la red eléctrica hacia zonas rurales, de mejoramiento de viviendas en los asentamientos, al mismo tiempo que se observa una mayor burocratización del acceso al crédito para emprendimientos agrarios a pequeña escala y el incumplimiento de otras promesas como la creación de 500 escuelas en los asentamientos (Lambranhó, 2006)¹⁰.

Mientras tanto a inicios de 2006 algunos dirigentes del MST se pronuncian críticamente sobre la impracticable reforma agraria durante el gobierno de Lula, señalando que en cuanto las exportaciones agrícolas reportaban enormes lucros a los productores sojeros, quedaba en evidencia la extensión de la frontera agrícola y la desregulación de la tecnificación del trabajo agrario y ponía en evidencia que no estaba siendo ejecutada ni una confiscación del latifundio que ha crecido en el centro-oeste del país (Lambranhó, 2006).

⁹ Entre la asunción de Lula y marzo de 2004 el MST había realizado unas 80 ocupaciones de tierras.

¹⁰ En entrevista concedida en 2006 al INESC, por la dirigente nacional del Movimiento, Marina Santos, señala que desde la asunción de Lula hasta entonces sólo se había creado una escuela en todo el territorio nacional con ocupaciones de *sin tierra*.

Asimismo otras expectativas son puestas en cuestión en la misma coyuntura, como la producción de biodiesel y el cultivo de alimentos en los asentamientos, contabilizándose sólo unas pocas experiencias sobre en el primero de los temas. A la nómina de críticas se agrega que la ocupación de 260 mil hectáreas de tierras por parte de la empresa Aracruz Celulose, en Río Grande do Sul, que trajo aparejado con el monocultivo de eucaliptus la amenaza a la supervivencia de comunidades indígenas y quilombolas¹¹ que habitan las proximidades de ese territorio.

El momento crítico de la relación entre el MST y el gobierno fue la gran movilización de abril de 2007 en coincidencia del día nacional de luchas, ocasión en que diversas categorías de trabajadores y organizaciones sociales, se movilizaron bloqueando rutas y puntos de acceso a las capitales. Debemos subrayar en este sentido, que los cortes de ruta y bloqueos de puntos centrales de acceso a las capitales constituye una estrategia inaugurada por el Movimiento Sin Tierra, si bien que en algunos momentos de la historia política las marchas hacia los centros urbanos fueron ensayadas con notable masividad. Sin embargo, pese a que parte del activismo y la dirigencia del MST mantienen estas críticas, las acciones públicas del Movimiento se constituyen en sucesivas oportunidades para reivindicar la continuidad del gobierno de Lula en un segundo mandato.

A partir de estos pocos datos abrimos una pregunta tan cara cuanto incómoda para la filosofía política: ¿cómo se define el progresismo de un partido político? O bien, ¿de un gobierno?. Si por una parte el Partido de los Trabajadores ha izado desde su fundación, en 1980, las banderas de los oprimidos, reivindicando las luchas históricas contra la miseria y las formas de subordinación del pueblo brasileño, por otra, su programa de gobierno durante los dos mandatos de Lula ejecutó una agenda marcada por orientaciones contradictorias con esas discursivas pro - emancipatorias. Contradictorias en la medida que el programa de gobierno no sólo no promovió medidas confiscatorias de los grupos económicos y en particular del latifundio, que en su plataforma constituía un punto neurálgico, sino que nunca se enunció como de carácter anticapitalista. En esa dirección, la reducción de la densidad política tanto del Movimiento Sin Tierra, así como en la CUT (Central única de trabajadores) evidenció el perímetro ideológico de su vocación por alterar el cuadro de condiciones que produjeron históricamente la desigualdad en Brasil.

Sin embargo, la reducción de la movilización política tanto de la CUT como del MST en el ciclo que nos ocupa, apeló tanto a la confianza en la procedencia ideológica de ex obrero metalúrgico como al imperativo ético de “darle tiempo”, aventando así síntomas de una política que entendemos señala el límite del progresismo del PT, así como la deflación de la crítica que en otras coyunturas caracterizara a estas dos organizaciones.¹² Tampoco debe perderse de vista, como bien señala Werneck Vianna (2010), que la base ideológica del PT ha sido el pluriclasismo y el pluripartidismo, como alianza-freno a la llamada *cuestión nacional* y a la *modernización por lo alto*, dos postulados que todo actor político que se precie de progresista ha reivindicado en el decurso histórico brasileño. Sin embargo, tanto la cuestión nacional entendida como la constitución de un Estado rupturista de su pasado colonial, dominado por la ambigua relación entre libertad y esclavitud, como la modernización por lo alto, esto es, la transformación del entramado social mediante el despliegue de una transformación material de sus condiciones de vida, aunque sin

11 Sí llamadas las comunidades de remanentes de negros descendientes de esclavos.

12 Dejamos fuera nuestro escrutinio el gobierno de Dilma Rouseff a los efectos de alcanzar una cierta profundidad en el análisis antes que por considerar que el mismo presenta diferencias sustantivas en sus postulados de gobierno.



modificar la autonomía de los individuos frente a la voluntad del Estado, asumieron un escalafón retórico durante el gobierno Lula, a la usanza de un ethos de corte popular, modelado, como destacan Rocha Oliveira Tomaz y Martins Gouvêa a partir de la imagen del jefe nacido en un pueblo del interior, que apela emocionalmente mediante recortes de la cultura brasilera al presente político (Rocha Oliveira Tomaz y Martins Gouvêa, 2017).

Con retórica o sin ella, las dos formas de achicamiento de la esfera pública ensayadas por el gobierno Lula según distinguimos, arrastran las marcas de nacimiento del PT, cifradas en la tendencia a comparecer, como lo hiciera a través de su intervención en múltiples organizaciones sociales desde mediados de los ochenta, tras la búsqueda del consenso para promover políticas de bienestar, al mismo tiempo que a inclinarse a desestimar la ampliación de la representación política de las grandes mayorías, como ilustra en cierta medida el cuadro de alianzas con los partidos de centro derecha para conquistar apoyo en las cámaras legislativas, antes que la convergencia con partidos de izquierda. Así planteada, esta definición de la idea de democracia del PT como plataforma de actuación del gobierno de Lula, puede considerarse ciertamente una contradicción en sus términos, tratándose de un partido de masas, surgido en el contexto de la última dictadura, pero animamos esta conjetura siguiendo el sentido de la metáfora acuñada por Francisco De Oliveira, el ornitorrinco, con que en 1970 explicara el hibridismo de la coyuntura política de aquellos años y que re-utilizara en 2003 para pensar la extraña alianza entre el PT y el PSDB (Partido de la social democracia brasilera).¹³ De Oliveira afirmaba, *no es ni esto ni aquello*, refiriendo a su patética indefinición constitutiva de lo político.

En suma, los límites del programa del gobierno Lula hunden raíces en la propia delimitación axiológica de los orígenes del PT, trasvasando en un modo de gobernar en principio pragmático, pero detrás del cual puede reconocerse la orientación conservadora de la hegemonía neoliberal que iba generalizándose en Brasil, tal como apunta Sader (2009)¹⁴, ya que en esta etapa no sólo no se combatió sino que se consolidó la especulación financiera, manteniéndose las tasas de interés más altas del mundo, lo que atrajo peligrosamente un tipo erosivo de capital, que no pagó impuestos por su circulación interna y externa. Hegemonía simbolizada acaso en la designación del ex gerente del Banco Boston, Henrique Meirelles, como presidente del Banco Central durante el primer mandato. Completando el cuadro de señalamientos, y en coincidencia con Sader, indicamos que las iniciales prioridades de la agenda de gobierno fueron atenuándose en la medida que se intensificó la política de ajuste fiscal, iniciada por el ministro de finanzas Palocci, que limitó la disponibilidad de recursos para la ejecución de políticas sociales profundas. El pragmatismo a que referimos permitió precisamente balancear con políticas paliativas la inequitativa distribución de la riqueza, el ajuste impositivo y la reforma previsional, enmarcadas en lo que el Banco Mundial denominara *reformas de segunda generación*, apelando a medidas de impacto a corto plazo, las que no obstante fueron muy bien recibidas entre los sectores de la población más castigados por la pobreza y la desocupación.

Si por una parte las referidas reformas constituían una apuesta a ganar el voto de confianza del empresariado, por otra, el Estado quedó preso de esas prerrogativas al punto

13 Véase Perlatto (2015).

14 Sin embargo, debe señalarse que Emir Sader como otros intelectuales que asumieron posiciones críticas sobre la primera etapa del ciclo PT en el gobierno, luego fueron adscribiendo a adhesiones más acríicas a su programa y actuación política.

de no poder definir una política de desarrollo, incluso en los moldes del capitalismo, que como señalamos alterase la distribución de la propiedad de la tierra y el monopolio de los medios de producción de la riqueza. Para Lula, que todos los brasileños pudiesen comer tres veces al día constituía ya una revolución social. Ese y otros postulados ciertamente obnubilaron la posibilidad de limitar la confianza en su liderazgo, que ya hacia la segunda etapa de su gestión se centró en justificar una visión de crecimiento moderado, basado en la consolidación de la exportación, la ampliación y diversificación del mercado interno y el desplazamiento de las políticas sociales de los focos, otrora definidos prioritarios, hacia otros sectores de la población.

La euforia interrumpida: unas pocas conclusiones

Asumiendo que la movilización de las organizaciones sociales constituye una usina de interpelación a los gobiernos en los sistemas democráticos, el llamado de Lula a los órganos sindicales y los movimientos sociales a moderar el caudal de sus protestas, refleja por una parte su preocupación por no ofrecer, a la derecha brasileña, flancos para la crítica a su gestión, particularmente encarnizada a través de los grandes medios de comunicación. Evidencia además el acompañamiento acrítico de una parte del PT, en coexistencia con otro sector, opositor al programa de gobierno, que no consiguió articular una resistencia real a la mutación de sus principios fundacionales ni impedir en particular la cooptación de la CUT y el MST, convertidos, como ya subrayamos, la primera en filial del Ministerio de Trabajo y el segundo en destinatario pasivo de deficitarias remesas de recursos para el sostenimiento de los asentamientos rurales. Asimismo, ni la salida del gabinete de figuras respetadas por su coherencia política y compromiso con las históricas luchas sociales, como Frei Betto ni la formación de un partido disidente de la ortodoxia del PT (el Partido socialista de los trabajadores unidos, PSTU), en 2004, sirvieron de alerta, en ese sentido, al rumbo de la política del gobierno.

El rápido recorrido por algunas señales de la gestión Lula respecto de la CUT y el MST exponen en todo caso lo que Francisco de Oliveira (citado por Perlatto, 2015) atinadamente llamara hegemonía ás avessas (hegemonía marcha atrás), como modo de gobierno conservador de matriz neoliberal a la sud- africana, en que la clase dominante dimite a favor de los dominados bajo la única condición de que los fundamentos estructurales de su dominación no sean cuestionados. Así entendido el llamado a reducir la radicalidad de las acciones colectivas y las prácticas desarticuladoras de la movilización política en los moldes descritos, supone un aplanamiento de los conflictos de clase y una rebaja de la conflictividad social, como blindaje a cualquier oportunidad de cuestionamiento a la nueva fase de la economía política en el país. La desmovilización política compone la sinfonía de ese pragmatismo señalado como clave de la gobernabilidad entre 2003 y 2011 (MTE 2003, 2005).

Las prácticas enumeradas no conformaron exclusivamente formas de desmovilización sino que formularon a la vez mecanismos de cooptación, ya que en algunos momentos la apelación e incluso de confrontación del propio Lula con los sectores sindicales y los movimientos sociales, particularmente la CUT y el MST, definieron claramente una restricción de la politización ante la reglamentación del estado sobre los derechos laborales, la reducción del poder sindical para definir contrapesos a la política económica en la negociación sindical y su consecuente disminución de injerencia en la discusión sobre los convenios colectivos como ya indicamos. La limitación del



desempeño sindical y de los movimientos sindicales es funcional en este sentido a la reestructuración de la economía capitalista bajo los términos indicados, proceso de ningún modo puede atribuirse exclusivamente al ciclo gobierno del PT en Brasil, pues dicha reconfiguración se inicia ya en el caso brasileño con la crisis del ABC paulista hacia fines de los ochenta como indica Da Silva Blass (1995), momento en el que se inicia una virulenta flexibilización laboral en la industria automotriz y metalúrgica, durante el gobierno de Figueiredo.

Desde una filosofía política afligida por el presente queda por reconstruir el rastro, en el imaginario social brasileño, de dos conjeturas contrapuestas. Una, que sigue lo que De Arruda Sampaio jr., llama *la inculcación a la sociedad latinoamericana de la idea de que las economías de la región están destinadas a curvarse ante inevitabilidad de la globalización de los negocios y a ajustarse lo más rápidamente posible a las exigencias del capital internacional y de las potencias hegemónicas* (2007:143) y otra, que anhela el completamiento de la revolución democrática, como superación de los antagonismos socialmente existentes, subvirtiendo los malogrados afanes de modernización empeñados desde el varguismo hasta el presente y profundizando el pluralismo político, acaso como única garantía de una vigilancia atenta de lo real y lo posible para el destino del pueblo brasileño.

Nótese que no afirmamos en momento alguno que el PT haya traicionado una vocación socialista o un ideario comunista. Es un error conceptual esa caracterización, como afirma Ribeiro (2012). El PT sólo coqueteó con una vaga idea de socialismo en sus inicios, declamando la necesidad de un Estado de bienestar social, ganando incluso algunos enclaves municipales e impulsando gestiones de cuño progresista, como el gobierno de Porto Alegre, pero la postulación de Lula a la presidencia en dos oportunidades anteriores a 2002 y sus consecuentes derrotas, le empujó a un proceso de aggiornamiento ideológico centrado en remozar su ideario en torno a la tesis de un pacto social que permitiese respaldar un plan de desarrollo general del país, con base en el sector productivo. En ese sentido, la conquista electoral que consagró a Lula en la presidencia no podría leerse como una victoria de la clase trabajadora sino del ascenso a la esfera gubernamental de un ex líder sindical que ya había atestiguado la devaluación de gran parte de la presión social que liderara el movimiento sindical brasileño en las dos décadas anteriores, particularmente durante los gobiernos inaugurales del programa neoliberal, esto es, de Itamar Franco y de Fernando Henrique Cardoso. Predicando postulados orientados a ganar la confianza de las elites nacionales, el programa pre-electoral de Lula borró de su semántica la superación del modelo económico vigente, agitando la defensa de libertades civiles y políticas, de ideas sobre capitalismo con justicia social y de república representativa y federal, dio sustento a la base programática que impulsó sus dos presidencias, sobre la que incurrió en desaciertos y conculcaciones, cobrándose en el camino el protagonismo de dos sujetos políticos que más han definido ese menú de reivindicaciones en los últimos casi cuarenta años de historia brasileña.

El PT y el propio Lula son, en todo caso, experiencias devenidas inexorablemente en intentos fallidos de gobernar con los principios del ideario democrático un régimen de producción y organización social asentado en la lógica del capitalismo global periférico, esto es, cuyo orden constitutivo radica en la imposibilidad de superar sus propias contradicciones. Orden que sobrevive precisamente, o bien fraccionando, o bien disecando, las posibilidades de interpelación y alteración de las valencias políticas que resguardan tanto el modo de producción y acumulación de la riqueza como las

autorizaciones jurídicas y culturales que las reproducen y el comportamiento de las elites que aseguran su glotonería. El PT a través de Lula y Lula como personificación del programa del PT cooperaron para el despliegue de un neokeynesianismo, como designa Harvey al nuevo momento de la relación entre economía y política (2003) que debió trazar nuevos papeles institucionales, promotores de un nuevo acople entre capital corporativo y trabajo, creando y manteniendo arreglos normativos, con una firmeza, ciertamente contradictoria respecto al capital político y simbólico que había tramado la biografía de Lula en las décadas anteriores.

Referencias

- BALÍBAR, E. y OTROS (2001) ¿Pensamiento único en filosofía política?. Revista Actuel Marx. Ediciones Tesis 11.
- DA SILVA BLASS, L. m. (1995), A vaca brava na trajetória recente da luta dos metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo. ANPOCS, Caxambu, Brasil.
- DE ARRUDA S. J. (2007) Globalizacao e reversao neocolonial. O impasse brasileiro. En Guillermo Hoyos Vásquez compilador (2007) Filosofía e teorías políticas entre la crítica y la utopía. CLACSO, BS. As.
- DE SOUSA SANTOS, B. (2017) La difícil democracia. Desde la periferia europea. Ediciones Akal, Madrid.
- DIAS, E. F. e BOSI, A. (2005) Estado, capital, trabalho e organização sindical: a (re) construção das classes trabalhadoras no Brasil. Outubro, n. 12.
- DRUCK, G (2006) Os Sindicatos, os Movimentos Sociais e o Governo Lula: Cooptação e Resistencia. Observatorio Social de América Latina. Año VI nro 19. CLACSO.
- GALVÃO, A. (2010) O movimento sindical durante o governo de Lula entre a divisao e a unidade. VI congreso de la Asociación Latinoamericana del Trabajo, México.
- GALVÃO, A. (2005) Reforma Sindical: As Polêmicas por detrás dum Falso Consenso”. Pucviva PUC, São Paulo. N° 23, Jan-Mar.
- HARVEY, D. (2003). A Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Loyola São Paulo. 12ª edición.
- MTE. (2003). Fórum Nacional do Trabalho. Reforma Sindical e Trabalhista e Afirmação do Diálogo Social. Ministério do Trabalho, Brasília, mimeo.
- _____ (2005) “Reforma Sindical-Proposta de Emenda à Constituição - PEC 369/05. Anteprojeto de Lei”. Ministério do Trabalho, Brasília, mimeo.
- OLIVEIRA TOMAZ, N. R. y MARTINS GOUVÊA, L. H. (2017) Um estudo do ethos em discursos do ex-presidente Lula. Revista de Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 25, n. 1, p. 441-471.
- PERLATTO, F. (2015) Decifrando o governo Lula: interpretações sobre o Brasil contemporâneo. Revista de Ciências Humanas, Viçosa, v. 15, n. 1, p. 256-272, jan./jun.
- PETRAS, J. y VELTMEYER, H. (2005) Movimientos sociales y poder estatal. Argentina,



Brasil, Bolivia, Ecuador. Lumen, México.

RIBEIRO, R. J. (2012) O PT nao é comunista. Disponible en: <https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/renato-janine-o-pt-nao-e-comunista>. Fecha de consulta: 25/11/18

SADER, E. (Editor) (2013), Lula y Dilma. Diez años de gobiernos posneoliberales en Brasil. Flacso Brasil. Traficantes de sueños, Madrid.

_____. (2009) El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamericana. Siglo veintiuno editores, Bs. As.

SAMPAIO JR, P. de A. (2005). Brasil: as esperanças não vingaram. Em OSAL. CLACSO, Bs. As. N° 18, septiembre-diciembre.

WERNECK VIANNA, L. (2010). O lulismo e o PT”. O jornal de todos os brasileiros. Disponible en: <https://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/o-lulismo-e-o-pt-por-verneck-vianna>. Fecha de Consulta: 29/11/2018

